

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria resaltó que estas disposiciones constituyen un serio retroceso a lo poco que se había avanzado hasta ahora en las relaciones bilaterales, así como un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra el país caribeño desde 1962.

En cuanto a las nuevas restricciones a los viajes a Cuba, Vidal dijo que son injustificadas, tienen una motivación política, además de ir en sentido contrario a la tendencia ascendente del número de visitantes extranjeros que llegan a la isla, que este año ya alcanzó los cuatro millones.

Reiteró el rechazo a la advertencia emitida el 29 de septiembre acerca del supuesto peligro que representa para los estadounidenses visitar la mayor de las Antillas, con el pretexto de los supuestos incidentes de salud de sus diplomáticos aquí, y al respecto recordó que Cuba está entre los primeros lugares de los países más seguros para los viajeros de otros países.

Informó además que decenas de grupos universitarios y de otros sectores de la sociedad norteamericana cancelaron de forma imprevistas sus planes para visitar la isla este mes y en diciembre, ante la campaña de miedo desarrollada por Washington.

La funcionaria alertó que existe una intención política detrás de los cambios a las regulaciones de intercambios “pueblo a pueblo”, a las que se refuerza ahora sus intenciones subversivas.

Agregó que resulta arbitraria y desordenada la lista de 179 entidades cubanas, anunciadas este miércoles, con las cuales la Casa Blanca prohíbe a empresas de la nación nortea y otras organizaciones hacer transacciones de cualquier tipo por considerarlas vinculadas a los sectores de la defensa y la seguridad.

En dicha relación aparecen el Ministerio del Interior y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cinco grupos empresariales, 83 hoteles, dos agencias de viaje, cinco marinas, 10 tiendas de diferentes tipos, entre otros organismos de diversa naturaleza.

Los documentos dados a conocer este miércoles obligan a que todos los viajes educativos no académicos se lleven a cabo bajo los auspicios de una organización que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, algo que había sido eliminado por el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017).

Los textos aclaran que los negocios y acuerdos establecidos antes de la puesta en práctica de las presentes disposiciones podrán seguir adelante, entre ellos los vuelos de las aerolíneas estadounidenses y los viajes de los cruceros, aunque serán un freno a futuros convenios bilaterales.